

# La sociedad civil movilizada y las reformas democráticas en la República Dominicana

## Introducción

La transición a la democracia electoral que se produjo en la República Dominicana en 1978 inició un proceso organizativo y de estrategias reivindicativas de distintos sectores sociales. La naturaleza y forma de esos movimientos varió en el periodo 1978-2000 en función de varios factores, entre los más importantes: 1. La situación económica, 2. El partido en el poder, 3. Las estrategias del gobierno de turno para ejercer control social sobre la sociedad movilizada, 4. El tipo de relación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales, y 5. El financiamiento disponible para las organizaciones sociales. El objetivo de este trabajo es analizar los cambios y continuidades de los movimientos sociales en la República Dominicana durante el periodo 1978-2000, en el contexto de los desafíos económicos que enfrentó la sociedad dominicana y en el espacio político más largo y consistente de apertura democrática que ha vivido el país en su historia republicana.

En este artículo se identifican cinco periodos en el proceso de organización y movilización social que se produjo en la República Dominicana entre 1978 y 2000, el lapso más largo de apertura política que ha tenido el país. Se plantea que la naturaleza y la forma de estos movimientos ha variado como resultado de la situación económica, el partido en el poder, las estrategias de distintos gobiernos para ejercer control social sobre los grupos movilizados, el tipo de relación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales y el financiamiento disponible para las organizaciones sociales. En cuanto al debate teórico sobre la relación entre movimientos sociales y democracia, se plantea que esta relación no es unívoca, y que en determinadas circunstancias los movimientos sociales pueden ayudar a la democratización y en otras a obstaculizarla.

♦ Profesora de Sociología y Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos. Department of Sociology, Temple University, Filadelfia.

espinal@astro.temple.edu

En el trabajo se identifican cinco periodos del proceso de movilización social que inició en 1978:

- El primer periodo se caracterizó por la movilización obrera a través de sindicatos organizados en demanda de mejores salarios, mejores precios y el derecho a la negociación colectiva durante los años 1978-1982. En este periodo se produjeron también fuertes tensiones entre el empresariado y el primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano PRD.
- El segundo periodo se caracterizó por la explosión del descontento popular a través de la violencia callejera y el asalto a comercios (las llamadas “pobladas”), como reacción a las medidas de ajuste económico impuestas por el presidente Salvador Jorge Blanco durante el segundo gobierno del PRD, entre 1982 y 1986.
- El tercer periodo se caracterizó por el surgimiento y organización de un movimiento popular, fundamentalmente de extracción urbana y en barrios marginados, que presentó múltiples demandas socioeconómicas a través de movimientos huelguistas nacionales organizados por el Colectivo de Organizaciones Populares. Estas protestas se produjeron en el contexto de la vuelta de Joaquín Balaguer al poder en 1986, quien impulsó un programa económico de expansión del gasto público, lo cual generó un fuerte proceso inflacionario entre 1987 y 1990. Un fenómeno nuevo e importante en este periodo fue el “diálogo tripartito”, que contó con la participación de los sectores empresarial, sindical y gubernamental a través de la mediación de representantes de la iglesia católica. Durante estos años, también fueron importantes las movilizaciones de organizaciones profesionales.
- El cuarto periodo se caracterizó por la incorporación de los sectores medios a la lucha por consolidar la de-

mocracia, después de la reelección de Balaguer en 1990, la cual se dio en condiciones de dudosa transparencia electoral. Las luchas que se desarrollaron entre 1990 y 1996 tuvieron fundamentalmente un carácter cívico-democrático y buscaron incidir sobre las reformas del sistema político y la transparencia electoral. Se produjo aquí un movimiento que emergió bajo el concepto de “sociedad civil”, es decir, un movimiento con marcada autonomía frente a los partidos políticos y el Estado, y con una fuerte presencia de la clase media.

- El quinto periodo correspondió al primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana PLD, que inició en 1996 y concluyó en el año 2000. Se caracterizó por una diversidad de movimientos sociales, entre ellos:
  1. La continuación, aunque en menor escala, de los movimientos de sectores medios por consolidar la institucionalidad democrática;
  2. La protesta callejera de diversos grupos sociales en barrios y poblados que demandaban reivindicaciones específicas a sus comunidades sin una aparente coordinación nacional;
  3. Las huelgas de grupos profesionales por reivindicaciones laborales;
  4. Movimientos huelguistas nacionales esporádicos, coordinados por organizaciones populares.

La discusión teórica sobre la relación entre movimientos sociales y democracia en América Latina ha girado, fundamentalmente, en torno a la siguiente pregunta: ¿Contribuyen los movimientos sociales a la democratización o, por el contrario, la obstaculizan? Planteado de otra forma: ¿Tienen los movimientos sociales como objetivo consolidar la democracia o muestran, por el contrario, una tendencia antisistémica? Hay estudios que asignan un lugar importante a los movimientos sociales en el análisis de los procesos de transición democrática e identifican en estos movi-

mientos una contribución importante a la expansión de la democracia (ver trabajos en Escobar y Álvarez (eds.), 1992; Álvarez, Dagnino y Escobar (eds.), 1998). Sin embargo, la tendencia teórica dominante sobre la democracia latinoamericana de fin del siglo XX es analizar con cautela el papel de los movimientos sociales en la democratización latinoamericana. Por ejemplo, la discusión inicial sobre la transición democrática en América Latina tuvo más bien un sesgo cauteloso hacia los movimientos sociales. O'Donnell y Schmitter (1986:55) reconocieron que sin la presión popular la transición a la democracia sería más limitada, pero plantearon que la ausencia de un movimiento popular fuerte minimizó el riesgo de un golpe de estado en el periodo de transición democrática en América Latina a fines del decenio de 1970 y principios del de 1980. Esta reflexión estaba muy influenciada por la experiencia de los movimientos sociales en América Latina de las décadas de 1950, 1960 y 1970, cuando fue importante el efecto desestabilizador del régimen político conseguido por algunos movimientos sociales.

La posición que se adopta en este trabajo es que la relación entre movimientos sociales y democracia no es unívoca. Los movimientos sociales pueden ayudar u obstaculizar un proceso de transición o afianzamiento de la democracia en función de varios aspectos: 1. Los objetivos del movimiento social, sus métodos de lucha y nivel de organización; 2. La capacidad (o incapacidad) que tenga el Estado u otro grupo social para dar respuesta a las demandas del movimiento social; y 3. La situación general de estabilidad (o inestabilidad) del régimen político. Al considerar estos elementos, podemos establecer tres posibles hipótesis:

- A mayor nivel de organización y capacidad de lucha del movimiento social, y menor capacidad del Estado u otro grupo social para dar respuesta a las demandas

del movimiento, mayor posibilidad habrá de que el movimiento social transforme el régimen político o de que afecte su estabilidad.

- A mayor nivel de organización y capacidad de lucha del movimiento social, y mayor capacidad del Estado u otro grupo social para dar respuesta a las demandas del movimiento, mayor probabilidad de afianzamiento del régimen político.
- A menor nivel de organización y capacidad de lucha del movimiento social, habrá menor posibilidad de que el movimiento obtenga conquistas específicas y éste tendrá menor capacidad de transformar el régimen político o afectar de manera importante su estabilidad.

El otro factor importante que debemos considerar al analizar la relación entre los movimientos sociales y la democracia es el papel de los partidos políticos. Los partidos pueden: 1. Jugar un papel de subordinación de los movimientos sociales mediante su control y cooptación, 2. Alejarse del movimiento social para ejercer un poder cuasi-monopólico en la esfera política, o 3. Vincularse con el movimiento social para potenciar su capacidad de acción política. De aquí se deriva la siguiente hipótesis: Los movimientos sociales tienen una mayor capacidad de transformar el régimen político cuando los partidos se vinculan a aquellos para potenciar su capacidad de acción, o cuando los partidos se alejan del movimiento social y pierden su capacidad de monopolizar el poder político. En otras palabras, es con la ayuda de los partidos, o en medio de una debilidad partidaria, que los movimientos sociales tienen una mayor capacidad de transformar el régimen político.

En general, las conquistas de los movimientos sociales en el contexto de la democracia política pueden analizarse en torno a tres áreas de trabajo, típicas de esos movimientos: la conquista de derechos ciudadanos, las reivindicacio-

nes sociales y la transformación profunda del sistema político. La transición a un régimen democrático supone la conquista de derechos ciudadanos básicos. De hecho, el reto de los movimientos sociales es expandir los derechos ciudadanos en la esfera política. Por otro lado, en sociedades con serios problemas de desigualdad social y pobreza, las reivindicaciones sociales constituyen un espacio vital para la existencia y supervivencia de los movimientos sociales. La capacidad de organización y movilización de los sectores sociales en demanda de reivindicaciones y la capacidad de respuesta que tenga el Estado y/o los empleadores delimitarán la intensidad de las luchas y el contenido de las mismas, lo cual tendrá efectos más o menos transformadores del sistema. Finalmente, la transición a la democracia en la América Latina de finales del siglo XX coincidió con el debilitamiento de los movimientos sociales antisistémicos que buscan una transformación profunda en los ámbitos político y socio-económico. Por el contrario, un fenómeno importante que caracteriza el espacio de acción colectiva es la variedad de actores sociales y la diversidad de temas o problemas que enfrentan estos grupos.

En el caso dominicano encontramos que en el periodo 1978-2000 se registraron muchas protestas y movilizaciones sociales, pero el limitado poder organizativo y de coordinación de los sectores populares le permitió al Estado obviar muchas de las demandas planteadas por los grupos movilizadas. En este sentido, el movimiento social dominicano tuvo un impacto limitado en democratizar el régimen político (con la excepción de los grupos medios, entre 1990 y 1996) o transformar la democracia existente. El caso dominicano ilustra también que no es válida la suposición pesimista de que los movimientos sociales tienen necesariamente un efecto desestabilizador en el régimen político. A pesar de la proliferación de protestas sociales, el sistema político dominicano se mantuvo estable.

La experiencia de la movilización social dominicana evidencia que los grupos sociales que participan en la acción colectiva definen una variedad de temas y prioridades que le dan sustento a los movimientos. Mientras los sindicatos enfatizaron las reivindicaciones laborales, los grupos barriales se concentraron en las reivindicaciones comunitarias, sobre todo en el área de servicios públicos. Por su parte, los sectores medios han enfatizado los temas de derechos ciudadanos y las reformas políticas. Sin embargo, en momentos de crisis económica o política estos grupos pueden coincidir en sus luchas y formar alianzas.

#### La organización obrera y empresarial, 1978-1982

---

La transición a la democracia electoral, en 1978, aumentó las expectativas de cambio social en la República Dominicana. El surgimiento de un gobierno de corte socialdemócrata, con el Partido Revolucionario Dominicano PRD, contribuyó a afirmar las expectativas de cambio democrático en su dimensión política y socioeconómica después de casi un siglo de política autoritaria y del frustrado intento de democratización a principios de la década de 1960. Limitada en su organización durante los 12 años de política laboral represiva del gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1978), la clase obrera dominicana, aunque muy dividida en términos de organización y partidarios, experimentó un proceso de ebullición organizativa y de luchas reivindicativas a partir de 1978.

Por su parte, el sector empresarial se enfrentó, por primera vez en muchos años, a una situación de movilización social en el contexto de un gobierno democrático. La incertidumbre que este nuevo fenómeno generó en el empresario motivó un proceso importante de organización empresarial, así como también fuertes tensiones entre las

organizaciones empresariales y el gobierno del PRD en materia de política laboral y económica. En el aspecto económico, este periodo se caracterizó porque se agudizó la recesión, como resultado de los altos precios del petróleo, el aumento del déficit fiscal del gobierno central ante una explosión del gasto público y el aumento de la deuda externa. Las protestas del empresariado se centraban en una crítica al gobierno por su supuesta política laboral permisiva y su excesivo control de las transacciones comerciales mediante controles de precio y subsidios.

El proceso organizativo del movimiento sindical dominicano se hizo evidente con un aumento inmediato del número de sindicatos registrados en la Secretaría de Trabajo. De un total de 956 sindicatos, alrededor de 30 por ciento eran sindicatos nuevos registrados entre 1978 y 1982. Otro fenómeno importante fue la rehabilitación de sindicatos fuertes cuyo registro había sido cancelado en años anteriores por la Secretaría de Trabajo —el caso más significativo fue el Sindicato Unido del Central Romana, que había representado el foco de unidad y activismo sindical en el decenio de 1960. Con la resolución 22-78, la Secretaría de Trabajo abolió las resoluciones 44-73 y 46-73 del 26 de noviembre de 1973, mediante las cuales se cancelaron más de 300 sindicatos (Espinal, 1987). Por su parte, en la expectativa de una ebullición sindical, el PRD (partido gobernante) fundó el 12 de noviembre de 1978 la Unión General de Trabajadores Dominicanos UGTD, como mecanismo para incidir en el movimiento obrero. Dada la importancia empresarial que tenía el Estado dominicano en ese entonces por la cantidad de empresas propiedad del Estado, fue relativamente fácil para el PRD consolidar una central obrera con sindicatos de empresas estatales. Para 1981, la UGTD contaba con la mayor cantidad de trabajadores organizados en sindicatos (45%), quienes provenían fundamentalmente de sindicatos grandes de empresas estatales.

Con un movimiento sindical dividido en cinco centrales obreras,<sup>1</sup> el PRD pudo fácilmente afianzar su posición de poder en el movimiento obrero. A pesar de que la agudización de la crisis económica con el aumento de los precios del petróleo y la baja en los productos dominicanos de exportación produjo huelgas y movilizaciones, sobre todo entre 1980 y 1981, el movimiento obrero dominicano se mantuvo dividido, y por tanto, limitado en su capacidad de obtener conquistas reivindicativas durante el primer gobierno del PRD (1978-1982). Por su parte, el PRD, a pesar de su postura socialdemócrata, no adoptó un proyecto de vinculación corporativa de la clase obrera a través de sus centrales, aunque los dirigentes de la UGTD sí ocuparon posiciones importantes en las instituciones del Estado que requerían de representación laboral, como en el caso del Instituto Dominicano de Seguros Sociales IDSS y el Instituto de Formación Técnica Profesional (Infotep). Aunque posteriormente las otras centrales sindicales aceptaron a la UGTD en su calidad de confederación sindical, en un principio la reacción ante la formación de la UGTD fue de rechazo, bajo el argumento de que el PRD buscaba formar una “central blanca” (el blanco es el color del PRD) para controlar el movimiento obrero (Oviedo y Espinal, 1984).

Si bien la energía del movimiento sindical se alimentó de un gobierno más dispuesto a aceptar la sindicalización y a hacer algunas concesiones laborales dentro del nuevo marco democrático, las limitaciones del movimiento obrero y las que imponía el contexto socio-laboral y político eran significativas. En primer lugar, la acción laboral estaba limitada por la propia división del pequeño movimiento obrero en cinco centrales (el total de obreros organizados

<sup>1</sup> Las cinco centrales obreras eran: la Central General de Trabajadores (CGT), de orientación de izquierda; la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas (CASD), de orientación socialcristiana; la UGTD, vinculada al PRD; la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) de orientación conservadora; y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una pequeña central vinculada con la izquierda.

por las cinco centrales, en marzo de 1981, era de unos 267,000 obreros), cada una con afiliación partidaria diferente. En segundo lugar, el PRD nunca desarrolló una estrategia de organización e incorporación obrera bajo el modelo corporativista típico de la socialdemocracia europea, el cual operaba bajo el principio de que centrales obreras fuertes con amplia base de apoyo laboral se incorporaran oficialmente a los mecanismos de decisión del Estado. En la práctica, la UGTD no fue una entidad que aglutinara obreros para facilitar su inserción corporativa, sino una central que contribuyó a dividir el precario movimiento obrero dominicano y a establecer lazos clientelares entre un segmento obrero organizado y el Estado. En tercer lugar, la acción sindical se veía restringida por un empresariado renuente a hacer concesiones laborales, y que se mantuvo en confrontación directa con el gobierno entre 1978 y 1982.

La movilización empresarial en el periodo 1978-1982 no tenía precedente en el país. De haber sido una fuerza social poderosa aunque subordinada durante la dictadura de Trujillo (1930-1961) y el gobierno de Balaguer (1966-1978), pasó a ser, a partir de 1978, una fuerza mejor organizada y dispuesta a asumir un papel beligerante en el proceso político (Espinal, 1988). En este contexto de confrontación, el crecimiento organizativo del Consejo Nacional de Hombre de Empresas CNHE y su papel político en la sociedad dominicana fueron significativos. El CNHE se enfrentó al gobierno en cuatro temas fundamentales: el movimiento obrero activado, que disgustaba a los empresarios; el supuesto alejamiento del gobierno de la consejería empresarial; el discurso de izquierda que, según los empresarios, predominaba entre algunos altos oficiales del gobierno; y la desviación de la política económica hacia un mayor proteccionismo al consumidor mediante controles de precios (Espinal, 1998).

Los líderes del CNHE emprendieron una campaña de crítica al gobierno y se movilizaron entre diversas organiza-

ciones y en distintas regiones del país en busca de atraer nuevos miembros al CNHE. Como resultado de estas acciones de reclutamiento, la membresía del CNHE (organización cúpula del empresariado) aumentó de cuatro asociaciones, afiliadas en 1974, a once, en 1978, y a 40, en 1982. En este proceso de reclutamiento de organizaciones, los líderes del CNHE se enfrentaron públicamente al gobierno cuando se producían reuniones o asambleas empresariales. Las críticas más fuertes se dieron en torno a una supuesta expansión excesiva del papel del Estado en la economía (por ejemplo, en el establecimiento de controles de precio), la “permissividad” del gobierno con el sector laboral, y lo que los empresarios definían como su exclusión de los mecanismos de consulta y decisión del Estado.

Las tensiones intra-empresariales también contribuyeron a agravar la relación entre el gobierno y los empresarios, así como a acelerar el proceso de politización general del empresariado. Las principales divisiones de la clase empresarial se daban entre los industriales de Santo Domingo y los del interior del país, quienes consideraban que las leyes de incentivo industrial habían beneficiado sobre todo a los industriales de Santo Domingo (Moya Pons, 1992), y entre los industriales protegidos con leyes de incentivo y el sector importador-exportador, que prefería la liberalización económica.

En resumen, la clase empresarial dominicana experimentó un proceso organizativo, de politización y conflicto, entre 1978 y 1982: resistencia a las demandas reivindicativas de los trabajadores; confrontación con el gobierno por su regulación de la economía, su nivel de gasto público, y las proyectadas políticas de reforma económica; y conflictos intra-clasistas. Las expectativas de que el nuevo gobierno del PRD, que se inició en 1982, adoptaría políticas económicas favorables al sector empresarial, el cambio de directiva en el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) y el te-

mor a la inestabilidad del régimen político, contribuyeron a suavizar las relaciones gobierno-empresarios después de 1982. La clase obrera, por su parte, experimentó un periodo de incremento organizativo en cuanto al número de sindicatos registrados y de lucha en algunos segmentos laborales, como el de los choferes, pero esto se dio conjuntamente con una fragmentación de la dirección del movimiento en las cinco centrales sindicales. La fragmentación del movimiento obrero y la ínfima cantidad de trabajadores que representaba dicho movimiento en el conjunto de la población trabajadora dominicana dificultó un accionar sistemático de movilización que le diera protagonismo ascendente al movimiento obrero en las luchas sociales.

La confluencia de un empresariado dispuesto al diálogo y la negociación con el gobierno, y un movimiento obrero dividido, le dio estabilidad inicial al segundo gobierno del PRD durante la presidencia de Salvador Jorge Blanco (1982-1986). Sin embargo, los ajustes económicos anunciados por el gobierno en el acto mismo de toma de posesión del presidente Jorge Blanco en 1982, y ejecutados en 1984, crearon las condiciones para un ascenso rápido del movimiento popular fuera de las centrales obreras.

#### La movilización de los sectores populares, 1983-1986

La agudización de la crisis económica a principios de la década de 1980 tuvo consecuencias importantes en la organización y movilización social. Entre 1980 y 1981, los sindicatos de choferes organizaron grandes huelgas en protesta por el aumento en el precio de la gasolina, aunque la división del movimiento obrero dificultada su accionar conjunto desde una posición de fuerza y volvía improbable que el gobierno hiciera concesiones importantes. El empresariado, a su vez, después de un ataque frontal al primer gobierno del PRD, decidió modificar su postura de confron-

tación a favor de la colaboración. Esto creó las condiciones para que, posteriormente, se iniciara un proceso de diálogo entre empresarios y obreros con la mediación de la iglesia católica.

Particularmente importante en el periodo 1983-1986 es el surgimiento de los sectores populares como actores de protesta social. Las primeras manifestaciones importantes de protesta urbana-callejera se dieron en medio de un programa de ajuste económico que tenía como objetivo la renegociación de la deuda externa, y se basaba en una reducción de los subsidios a la producción y la liberalización del mercado cambiario. El resultado inmediato de estas medidas fue un aumento sustancial en los precios de los productos de primera necesidad. Las movilizaciones, conocidas como “pobladas”, se produjeron en abril de 1984 y consistieron en revueltas callejeras y asaltos a comercios (Ianni, 1985).

El programa de ajuste económico fue anunciado por el presidente Salvador Jorge Blanco en su discurso inaugural, en agosto de 1982. En enero de 1983, el gobierno firmó un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas económicas de ajuste se anunciaron a principios de 1984. Las disposiciones que más irritaron a la población fueron: el impuesto al valor agregado, la reducción o eliminación de los subsidios públicos a la producción agrícola y la liberalización del mercado cambiario. Contribuyó a agravar el descontento el hecho de que las medidas fueron tomadas por altos ejecutivos del Gobierno Central sin consultar a la población, ni siquiera al Congreso. Por otro lado, la situación económica era cada vez más precaria: en 1984, el nivel de crecimiento de la economía fue menor de uno por ciento, el consumo y la inversión declinaron dos y tres por ciento respectivamente, el ingreso per cápita bajó tres por ciento (Rodríguez, 1989:216). En 1985, la situación económica siguió empeo-

rando: el consumo privado bajó 13.7 por ciento, el nivel de desempleo alcanzó 27.2 por ciento, y el Producto Bruto Interno decreció 3.2 por ciento (Ceara, 1990:167).

Las reacciones ante las medidas de ajuste fueron diversas. El sector empresarial importador, exportador y financiero apoyó el plan económico. El sector industrial protegido sufrió un revés al liberalizarse el mercado cambiario, pero no articuló una fuerte oposición al gobierno. De hecho, a diferencia del periodo 1978-1982, cuando el empresariado a través de sus organizaciones cúpulas enfrentó al gobierno de Antonio Guzmán, el segundo gobierno del PRD, encabezado por Salvador Jorge Blanco, recibió el apoyo del empresariado. Los factores claves que ayudaron a producir este cambio fueron: la firma del acuerdo con el FMI, las expectativas de mayor estabilidad macro-económica y el establecimiento de un liderazgo empresarial más conciliador en el CNHE.

El impacto de las medidas de ajuste fue significativo para la clase media debido al aumento de los precios. Pero la clase media carecía de elementos aglutinadores para la movilización. La reacción violenta de protesta provino de los sectores populares, los cuales se lanzaron a las calles, en abril de 1984, en contra de las medidas de ajuste económico. Después de las violentas protestas de abril, las movilizaciones continuaron durante los dos últimos años del gobierno de Jorge Blanco, incrementándose el número de protestas de 103, en 1984, a 293, en 1986 (Tejada, 1989).

El estado de crisis económica, las precariedades de amplios sectores de la población, la creciente evidencia de corrupción gubernamental y los fuertes conflictos intra-partidarios en el PRD contribuyeron al fuerte deterioro de la popularidad del gobierno. Como resultado, el <S>PRD<D> perdió las elecciones de 1986, lo que facilitó el regreso de Balaguer al poder, esta vez mediante elecciones libres (Espinal, 1994).

La organización del movimiento popular  
y el diálogo tripartito, 1987-1990

El retorno de Joaquín Balaguer al poder, en 1986, tuvo dos efectos adversos para los sectores populares. En primer lugar, la política de alta inversión pública de Balaguer contribuyó a aumentar el nivel de inflación, problema que afectaba negativamente de manera particular a los sectores asalariados y de bajos ingresos. En segundo lugar, Balaguer era un líder poco proclive al diálogo con los sectores organizados y, en especial, de extracción popular. Lo primero contribuyó a aumentar el descontento popular, y lo segundo dificultaba la reducción de las tensiones sociales.

A principios de 1988, surgió una nueva organización: la Coordinadora de Luchas Populares (PRD). Esta organización decía representar a todos los sectores descontentos que no encontraban cabida en el movimiento sindical tradicional. La CLP fue, en principio, rechazada por el movimiento sindical organizado, los partidos políticos y el gobierno bajo el argumento de que no estaba claro a quién exactamente representaba la CLP. Con su poder social en ascenso, la CLP llamó a una huelga general en marzo de 1988, huelga que fue rechazada por los sindicatos, los partidos y el gobierno. Con apoyo limitado, la CLP no pudo paralizar el país como esperaba hacerlo. Pero, si bien la CLP carecía de estatus legal y legitimidad política como representante de los sectores populares, su capacidad de convocar huelgas y capitalizar el sentimiento de descontento en la población aumentó entre 1988 y 1990.

Paralelamente, las centrales obreras, empresarios, gobierno e iglesia católica gestaron el “diálogo tripartito”. No fueron incorporados al diálogo delegados del CLP por no ser reconocidos como representantes legítimos de ningún sector. Después de dos meses de intensas negociaciones, los

empresarios, obreros y representantes del gobierno acordaron una propuesta de ocho puntos para ser presentada al presidente Balaguer. El plan fue presentado al presidente Balaguer por una comisión encabezada por el arzobispo José López Rodríguez, en mayo de 1988. Sin embargo, en junio el acuerdo se desarticuló cuando seis centrales sindicales decidieron retirarse bajo el argumento de que el gobierno se mantenía en silencio ante las violaciones del pacto con los empresarios, quienes seguían aumentando los precios de los productos de primera necesidad. Si bien es cierto que el gobierno no impuso controles de precios, también ocurría que ante un movimiento de protestas ascendente orquestado por la CLP, el movimiento sindical estaba condicionado a ejercer presión política para que los empresarios y el gobierno hicieran algunas concesiones.

En un contexto de cuestionado éxito del “diálogo tripartito”, las asociaciones profesionales (médicos, enfermeras, agrónomos, maestros) se movilizaron por sus propias reivindicaciones. Por otra parte, la CLP se convirtió en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), estableciendo su identidad como representante de las organizaciones de base no representadas por otras organizaciones cúpulas. Su agenda reivindicativa se amplió en un intento por representar a múltiples sectores sociales, y a la vez presentarse como la voz crítica ante un movimiento sindical que se incorporaba a la negociación tripartita y perdía beligerancia. La CNOP hizo un llamado a huelga general para junio de 1989, se basó en una agenda de ocho puntos que fue presentada al gobierno: 1. Cambios en la política económica y moratoria en el pago de la deuda externa; 2. Reforma al sistema de seguridad social para incluir en la cobertura médica a los familiares de los trabajadores (ésta había sido una demanda de los obreros en el Diálogo Tripartito); 3. Aumento del salario mínimo; 4. Cumplimiento de los acuerdos establecidos por el gobierno con las asocia-

ciones profesionales; 5. La no-privatización de las empresas estatales; 6. Mejoramiento del transporte y otros servicios públicos; 7. Control de precio de los alimentos y medicinas; y 8. Tierra para los campesinos.

El gobierno decidió ignorar las demandas bajo el argumento de que la CNOP no tenía estatus legal ni estaba claramente establecido a qué grupos representara. Los empresarios y la iglesia católica reafirmaron su llamado al diálogo por temor a la violencia social e inestabilidad política. No obstante, el llamado a huelga de la CNOP ganó apoyo entre una población altamente descontenta con la situación económica aunque muy desorganizada. En la medida en que se aproximó la fecha de la huelga, los empresarios redujeron el tono contra la misma y dejaron que el proceso de oposición al gobierno se desarrollara. Para esa fecha, el empresariado se encontraba descontento con la política de excesivo gasto público de Balaguer y los controles cambiarios que mantenía el gobierno. Las centrales obreras, sin embargo, optaron por no apoyar el movimiento huelguista, en parte temerosas del protagonismo que ejercía la CNOP en la movilización social. Uno de los argumentos usados por las centrales obreras para no apoyar la huelga fue que ese movimiento perjudicaba la autonomía de la clase obrera porque la CNOP representaba muchos y diversos grupos sociales, lo cual no era una función del movimiento sindical (*El Siglo*, junio 2, 1989).

La huelga se realizó el 19 y 20 de junio de 1989. Los organizadores lograron paralizar la mayor parte de las actividades económicas del país. En ese sentido la huelga logró su objetivo. Sin embargo el gobierno no hizo concesiones importantes como resultado de la protesta, excepto por un modesto aumento al salario mínimo. La resistencia del gobierno a hacer concesiones se manifestó también ante la Asociación Médica Dominicana AMD y la Asociación Dominicana de Profesores ADP las cuales realizaron huelgas en esa misma época. Du-

rante la segunda parte del año 1989, el activismo de la CNOP declinó a consecuencia de las dificultades para lograr acuerdos con las centrales obreras y organizar protestas conjuntas. Mientras la CNOP buscaba el apoyo de las centrales, la dirigencia sindical buscaba diferenciarse del movimiento popular que decía representar la CNOP. El año de 1989 cerró con protestas sociales importantes, aunque con escasas concesiones a los demandantes.

Además de las protestas populares, la política económica de Balaguer generó descontento entre los empresarios. Balaguer impuso restricciones en el mercado cambiario que atentaban contra la libertad económica empresarial. No obstante, Balaguer conocía las divisiones del empresariado en torno a la política económica y podía ignorar parcialmente su descontento. Los desacuerdos más importantes se daban entre los industriales y los importadores-exportadores, y entre los grandes y los medianos industriales. Los industriales querían mayor protección y el sector orientado hacia la economía exterior, mayor liberalización. Los grandes empresarios buscaban retener sus beneficios en medio de las dificultades económicas y los medianos y pequeños empresarios buscaban una ampliación de los beneficios proteccionistas. Y estos conflictos impedían la unidad empresarial. En cuanto al descontento de los sectores populares, la estrategia de Balaguer consistió, por un lado, en resistirse a hacer concesiones, y por otro, en esperar que las dificultades organizativas y conflictos intra-grupales debilitaran el movimiento e impidieran un aumento de las protestas. La estrategia funcionó en cuanto a mantener su gobierno estable, pero el nivel de descontento con Balaguer era particularmente alto para 1990.

Las elecciones generales del 16 de mayo de 1990 ofrecieron un contexto nuevo para el movimiento social. Divisiones en la CNOP llevaron a la formación del Colectivo de Organizaciones Populares (COP), que jugó un papel crucial en

los movimientos de protesta en 1990. El COP organizó tres huelgas ese año. La primera se realizó los días 19 y 20 de junio y paralizó a todo el país. A esta huelga le siguió un “paro cívico” convocado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los días 13 y 14 de agosto, en protesta por el triunfo electoral disputado de Balaguer (el PLD alegó fraude, en las elecciones de mayo de 1990, a favor del Partido Reformista). A su vez, el COP convocó a huelgas nacionales en septiembre y noviembre. Estas huelgas, sin embargo, fueron infructuosas. Tensiones entre el movimiento popular y obrero (es decir, entre la COP y las centrales obreras), falta de claridad en los objetivos de la huelga (si sería de orden reivindicativo o político) y la duración de las huelgas (unos apoyaban la huelga por 48 horas, otros por 72 horas, mientras otros pedían que la duración fuera indefinida) fueron responsables de los fracasos de esas dos huelgas nacionales. En general, dos huelgas tan seguidas y con escasos resultados no fueron acogidas favorablemente por la población. Con Balaguer instalado nuevamente en la presidencia, y al faltar claridad de objetivos en el movimiento de protesta, la población confió cada vez menos en el efecto positivo que podían tener las huelgas para mejorar las condiciones de vida.

En resumen, la protesta social fue una característica central de la política dominicana en el decenio de 1980. La década comenzó con movimientos huelguistas selectivos, en protesta por los incrementos en los precios de la gasolina y el transporte. Las medidas de ajuste económico adoptadas a mediados de la década motivaron los movimientos de protesta violentos de 1984. El nivel de movilización se aceleró de nuevo en 1988 con la incorporación de nuevos actores urbanos (los pobres en los barrios marginados y los sectores medios profesionales a través de sus gremios). Estos movimientos mantuvieron su prominencia hasta 1990, cuando sus divisiones y la estrategia de cooptación o dila-

ción del gobierno dificultaron o debilitaron las acciones colectivas.

Incorporación de los sectores medios  
a la lucha por la democracia, 1990-1996

Las disputas electorales de 1990 y 1994 motivaron la activación de sectores medios en la lucha por consolidar la democracia dominicana. Las denuncias de fraude quedaron irresueltas e impunes en 1990, lo cual motivó una serie de reformas electorales entre 1992 y 1994, que tenía como objetivo hacer más transparentes las elecciones dominicanas. En la misma época surgieron organizaciones y programas que serían cruciales en la incorporación de sectores medios a la actividad política no partidista. En 1992 se inició el Proyecto de Iniciativas Democráticas (PID). El 31 de octubre de 1993 se constituyó como movimiento cívico la organización Participación Ciudadana (PC). Estas instituciones serían los pilares del proceso de organización y participación de la sociedad civil dominicana en la lucha por la consolidación democrática. Ambas incorporaron a su estructura directiva representantes de distintos sectores y organizaciones sociales (líderes empresariales, profesionales, sindicales y populares, periodistas y representantes de las iglesias y universidades del país) provenientes de una diversidad de organizaciones no gubernamentales (ONG).

El Proyecto de Iniciativas Democráticas se diseñó con una duración de 10 años (1992-2002). Es financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y administrado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). El objetivo del PID es promover una cultura democrática en la República Dominicana, motivar la participación ciudadana en los procesos democráticos, y mejorar el funcionamiento del Estado democrático. A diferencia de otros programas de USAID que

habían sido diseñados por expertos extranjeros, al diseño del PID se incorporaron intelectuales y analistas de la sociedad y la política dominicana radicados en el país. Desde la década de 1980, la PUCMM se había convertido en un espacio de negociación con la intermediación de su rector, monseñor Agripino Núñez Collado, entre diversos sectores sociales y el gobierno (Núñez Collado, 1997).

El objetivo específico del PID es financiar proyectos que emanan de organizaciones de la sociedad civil y tienen como propósito promover la cultura, participación y gobernabilidad democráticas. El diseño y forma de ejecución del PID ha facilitado la incorporación de un grupo importante de periodistas, dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), miembros de partidos políticos, empresarios y líderes locales al diseño y aplicación de estrategias y planes para consolidar la democracia dominicana. A su vez, el financiamiento de unos 140 proyectos y 630 actos a organizaciones sociales, entre 1992 y 1998, representó la incorporación de miles de ciudadanos (hombres y mujeres, de zona urbana, rural y semi-urbana)<sup>2</sup> a la discusión sobre el funcionamiento de la política en una sociedad democrática, y a su directa participación en momentos críticos coyunturales, como las elecciones de 1996. Una de las conquistas más importantes del PID ha sido incorporar al trabajo democrático sectores de la élite económica, intelectual y política de Santo Domingo, así como dirigentes de grupos populares. En la dirección del PID predomina esa élite. Los proyectos financiados por el PID, sin embargo, cubren un espectro más amplio de grupos sociales, incluyendo ONG altamente profesionalizadas así como también

<sup>2</sup> Los datos sobre proyectos y actos, al igual que el número de beneficiarios directos e indirectos de esos proyectos, aparecen en: Proyecto de Iniciativas Democráticas, *7 Años de compromiso con la democracia 92-99*, Santo Domingo, PUCMM/USAID, 1999.

grupos comunitarios o barriales con escaso nivel de formalización.

Participación Ciudadana (PC) surgió como movimiento cívico apartidista, con el objetivo de motivar la participación ciudadana en el proceso de reforma política que requería la República Dominicana. PC surgió en la ciudad de Santo Domingo con un grupo pequeño de periodistas y profesionales interesados en promover las reformas democráticas. La organización no creció hasta 1996, cuando se embarcó en la tarea de organizar una red nacional de observadores electorales, que aglutinó miles de voluntarios para participar en la observación de las elecciones presidenciales de 1996. Aunque la observación internacional de elecciones era familiar en el país, ésta era la primera vez que se organizaba una red de observadores nacionales (Espinal, 1998b). La organización y movilización de varios miles de observadores se convirtió en una especie de movimiento social coyuntural orientado hacia un tema específico: garantizar unas elecciones transparentes en 1996. La Red de Observadores jugó un papel estelar en las elecciones presidenciales de 1996, tanto en la calidad de los observadores que envió a las mesas de votación como en el acertado conteo rápido de votos. El resultado de este esfuerzo fue muy positivo, las elecciones de 1996 fueron las primeras elecciones no cuestionadas del periodo democrático.

La resistencia de Balaguer a implantar reformas económicas y políticas durante los diez años de su segundo periodo de gobierno (1986-1996) generó también descontento entre algunos sectores empresariales. Entre 1994 y 1996, un tema central que ocupó la atención de la cúpula empresarial fue la modernización y democratización del Estado, mediante el establecimiento de procedimientos institucionales y legales favorables a la democracia y factibles en su aplicación. Convocados por la PUCMM, los empresarios gestaron el Grupo de Acción por la Democracia (GAD) con el apoyo económico de

USAID. El GAD se constituyó para presionar a la celebración de elecciones libres en 1996 y la adopción de una agenda nacional de reformas. Por esta razón, entre las actividades del GAD estuvo la organización de una red de organizaciones comunitarias a escala municipal para la elaboración de una Agenda de Desarrollo Nacional. La organización de estos grupos municipales constituyó, en sí misma, un movimiento social en el ámbito local con una dirección nacional. Sin embargo, el diseño coyuntural del GAD y la conclusión del financiamiento de USAID llevaron rápidamente a la desaparición del GAD y sus estructuras locales, una vez concluido el proceso electoral de 1996.

La incorporación de los sectores medios al movimiento social por la democracia en el decenio de 1990 tuvo consecuencias importantes en cuanto sentar las bases para la transparencia electoral y facilitar una transición política generacional con el desplazamiento de Balaguer del poder. La ayuda internacional jugó un papel importante en la organización de este movimiento, pero constituyó a la vez una de sus limitantes por la incapacidad de estos grupos de sostenerse, o concebir su sustentabilidad futura, al margen de esa ayuda. El otro problema del movimiento es su focalizada dirección en Santo Domingo. A pesar de los esfuerzos de cada una de las organizaciones (PID, PC, GAD) para promover la incorporación de grupos y personas de otras partes del país, estas organizaciones centralizaron la toma de decisiones en la ciudad de Santo Domingo, con escaso nivel de descentralización.

#### Movilizaciones locales focalizadas y otras protestas, 1996-1999

El ascenso del PLD al poder en 1996, un partido sin base social de apoyo importante a escala nacional, coincidió con un aumento en la protesta popular focalizada en reivindicaciones concretas y localizada en barrios populares espe-

cíficos o poblados del interior del país. Enfrentando este problema y una huelga nacional realizada por el COP en noviembre de 1997, el gobierno del presidente Leonel Fernández convocó a un Diálogo Nacional para marzo de 1998. El presidente Fernández nombró, por decreto, una comisión organizadora del acto la cual incluía miembros de su gabinete, representantes de las iglesias, empresarios, dirigentes de ONG y líderes sindicales.

El Diálogo Nacional generó expectativas y suspicacia. Cientos de organizaciones se incorporaron a los trabajos preparativos del Diálogo con el propósito de que el gobierno oyera sus reclamos. Otros sectores se mantuvieron alejados por sus dudas sobre la veracidad de las intenciones del gobierno. A principios de 1998 se celebraron consultas populares en todo el país, a muchas de las cuales asistió el propio presidente Fernández. El proceso culminó con un acto de tres días celebrado en la ciudad de Santo Domingo, en el que participaron representantes de unas 500 organizaciones y contó con la asistencia permanente del presidente Fernández. Se plantearon y acordaron demandas en distintas áreas de la economía, la cultura, los servicios públicos y la reforma política. No obstante, a pesar de la mucha publicidad y presencia del gobierno en los actos del Diálogo Nacional, se ejecutaron pocos de los acuerdos, así el gobierno perdió la oportunidad de usar las demandas de la sociedad civil como plataforma para impulsar un proceso de afianzamiento democrático y redistribución de recursos en el país.

En su intento por mantener vigilancia y control sobre la protesta social, el gobierno estableció en 1997 la Comisión Presidencial para los Asuntos Barriales, adscrita a la Presidencia de la República. La Comisión tuvo como objetivo básico escuchar las demandas en zonas de conflicto e informar al Presidente del estado de la situación. A la Comisión se incorporaron calificados profesionales con conocimiento

de la situación barrial en el país, pero en la práctica fue difícil para la Comisión canalizar las muchas demandas de los sectores marginados a través de los ministerios que tienen a su cargo la ejecución de proyectos públicos.

Después de las elecciones congresionales-municipales de 1998, en las que el PLD no logró asegurar una mayoría ni en el Congreso ni en los gobiernos municipales, las protestas continuaron de diversas maneras en diferentes partes del país. Unas se focalizaron en determinadas localidades y tenían como objetivo reivindicaciones comunitarias. Otras fueron de carácter gremial profesional, como en el caso de las huelgas de maestros y médicos. En mayo de 1999, el gobierno enfrentó una segunda huelga nacional convocada por el COP, después de que éste pasara por un periodo de año y medio de letargo organizativo y reivindicativo. Para fines de 1999, las luchas sociales dieron paso a las luchas eminentemente políticas, al acercarse las elecciones presidenciales de mayo del año 2000.

### Conclusión

El caso dominicano muestra que en el periodo democrático ha habido una movilización importante de la sociedad. Durante el periodo 1978-82, la movilización social tuvo fundamentalmente un carácter gremial. Por un lado, aumentó el número de organizaciones sindicales así como su capacidad de movilización, en respuesta a la crisis económica que se agudizó con los aumentos del precio del petróleo. La estrategia del PRD de cooptar un segmento del movimiento obrero a través de la formación de una nueva central obrera (la UGTD) le permitió al gobierno incidir sobre la dinámica sindical e insertar un segmento del movimiento sindical a las instituciones del Estado que requerían de representación obrera y a su sistema clientelar. Posteriormente, otras centrales obreras se incorporaron también como represen-

tantes en organismos del Estado. La división del movimiento obrero en cinco centrales y el limitado número de instituciones públicas en que los obreros participaban son muestra, sin embargo, de que el PRD no implantó una estrategia corporativista hacia el sector laboral, a pesar de la orientación socialdemócrata del partido.

El periodo 1983-86 fue de fuerte movilización popular, en respuesta a las medidas de ajuste económico que implantó el gobierno en 1984. La espontaneidad de estos movimientos ante una crisis económica que se hacía cada vez más aguda, la respuesta represiva del gobierno y la carencia de una coordinación del movimiento fueron las características fundamentales de estas movilizaciones. La consecuencia política de ese movimiento fue la pérdida de popularidad del gobierno de Jorge Blanco, pero el régimen democrático como tal no se vio afectado de manera sustancial. La alternancia de partido en el poder ayudó a impedir un descontento general con la democracia.

La creciente organización y movilización popular que se produjo en el periodo 1987-1990 se entiende en el contexto de deterioro de la economía dominicana, la resistencia del presidente Balaguer a satisfacer demandas sociales y la formación de la Coordinadora de Luchas Populares. En este periodo se conjuga el descontento de diversos sectores sociales con las políticas económicas del gobierno, lo cual le permitió a la Coordinadora organizar huelgas nacionales con relativo éxito, en cuanto al apoyo que tuvieron. El gobierno, sin embargo, se resistió a hacer concesiones. El “diálogo tripartito” que se realizaba con la mediación de la iglesia católica servía, a su vez, para contener la posibilidad de un desbordamiento de la protesta popular a través de mecanismos no institucionalizados. Esto explica, en parte, por qué las grandes huelgas nacionales que se llevaron a cabo entre 1988 y 1990 no debilitaron significativamente al gobierno.

La disminución de la intensidad del movimiento popular contestatario, a partir de 1991, se combinó con un ascenso de los sectores medios a la presión social. Ahora el tema central no sería las reivindicaciones socioeconómicas, sino las reformas para democratizar la política dominicana. Aquí se conjugaron los intereses de la élite económica y profesional a favor de la modernización y la democratización del Estado. Este proyecto recibió un fuerte apoyo económico de USAID, a través de sus programas en economía, democracia, gobernabilidad y estado de derecho. Los efectos de estos esfuerzos fueron tangibles en varios momentos y aspectos: la firma del “Pacto por la Democracia”, en agosto de 1994, que redujo a dos años —por acuerdo constitucional— el mandato de Balaguer; la celebración de elecciones presidenciales libres en mayo de 1996; la salida de Balaguer del poder en agosto de 1996; la elección de una nueva Suprema Corte de Justicia en 1997; y la celebración de elecciones del congreso y las municipales, por primera vez separadas de las presidenciales, en 1998.

El ascenso del PLD al poder, en 1996, generó nuevas posibilidades y desafíos para la sociedad dominicana. Las expectativas de cambio ante el gobierno de un nuevo partido, con un liderazgo joven, eran importantes. Sin embargo, la dilación en los programas de cambio y la coalición conservadora, que había facilitado el triunfo de Leonel Fernández con el apoyo de Balaguer, crearon un espacio para el resurgir de la protesta social. Las protestas barriales proliferaron a partir de 1997, y en noviembre de ese año el Colectivo de Organizaciones Populares organizó una huelga nacional. La respuesta de apertura al diálogo por parte del gobierno sirvió para contener el movimiento de protesta en ascenso, pero la incapacidad del gobierno para absorber y responder las demandas que emergieron del diálogo facilitó el retorno de las protestas populares, después de las elecciones del congreso y las municipales de 1998. No obstante,

las elecciones presidenciales de mayo del año 2000 desviaron la atención política de las luchas sociales a la lucha partidaria por el acceso al control del Estado. ☹

- Bibliografía
- Álvarez, Sonia, Evelina Dagnino y Arturo Escobar. *Culture of Politics and Politics of Culture: Revisioning Latin American Social Movements*, Westview Press, Boulder, 1998.
- Álvarez, Vitordes. *Tiempo vivido*, Editora Taller, Santo Domingo, 1996.
- Arregui, Mariví. "Trayectoria del feminismo en la República Dominicana", en *Ciencia y Sociedad*, vol.8, núm.1, República Dominicana, INTEC, enero-marzo, 1988, pp. 9-18.
- (recopiladora). *Red Ciudadana de Observadores Electorales: Memorias*, Participación Ciudadana, Santo Domingo, 1997.
- Banco Interamericano de Desarrollo. *Prioridades básicas del país y relaciones ONG's-Estado: Síntesis de las posiciones de las organizaciones no-gubernamentales* (Encuentro Organizado por MUDE-CIPROS-CEPAE), Komunica, SA, Santo Domingo, 1996.
- Báez, Clara. "Democracia y movimientos de mujeres: Hacia una redefinición de los espacios políticos", en *Género y Sociedad*, vol.1, núm.1, República Dominicana, INTEC, mayo-agosto, 1993, pp. 1-20.
- . "Mujer y globalización en República Dominicana", en *Género y Sociedad*, vol.2, núm.2, República Dominicana, INTEC, septiembre-diciembre, 1994, pp. 1-12.
- Catrain, Pedro. "Transición democrática, social democracia y clases populares en la República Dominicana", en *Estudios Dominicanos*, año 1, núm.2, República Dominicana, IED, mayo-agosto, 1984, pp. 69-90.
- Cassá, Roberto. *Movimiento obrero y lucha socialista en la República Dominicana*, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo, 1990.

- Ceara Hatton, Miguel. *Crecimiento económico y acumulación de capital*, Cieca-UNIBE, Santo Domingo, 1990.
- Ceballos, José. "Organizaciones y movimientos barriales: Sujetos y actores sociales", en *Estudios Sociales*, año 28, núm. 102, República Dominicana, Centro Bonó, octubre-diciembre, 1995, pp. 41-68.
- Cela, Jorge, Isis Duarte y Carmen Julia Gómez. *Población, crecimiento urbano y barrios marginados en Santo Domingo*, Fundación Friedrich Ebert, Santo Domingo, 1988.
- Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). *El censo del 93 y la evolución poblacional de Santo Domingo: Análisis de una realidad urbana*, Monografía, Santo Domingo, 1997.
- CIPROS. *Sociedad civil y organizaciones no gubernamentales*, Cantera Gráfica, Santo Domingo, 1997.
- Ciudad Alternativa. *Antología urbana*, Editora Corripio, Santo Domingo, 1996.
- Díaz S., Juan Bolívar. *Trauma electoral*, Editorial AA, Santo Domingo, 1996.
- Escobar, Arturo y Sonia Álvarez. *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*, Westview Press, Boulder, 1992.
- Espinal, Rosario. "Labor, Politics and Industrialization in the Dominican Republic", en *Economic and Industrial Democracy*, vol. 8, núm. 2, Arbetslivscentrum, Sweeden, 1987.
- . *Democracia y autoritarismo en la política dominicana*, IIDH/CAPEL, San José, 1987b, y Editorial Argumentos, Santo Domingo, 1994.
- . "The Dominican Working Class: Labour Control Under Trujillo and After", en M. Cross and G. Heuman (eds.), *Labour in the Caribbean: From Emancipation to Independence*, Macmillan, London, 1998.
- . "Business and Politics in the Dominican Republic," en F. Durand y E. Silva (eds.), *Organized Business, Economic Change, and Democracy in Latin America*, North-South Center Press, Miami, 1998.

## Bibliografía

## Bibliografía

- . “Electoral Observation and Democratization in the Dominican Republic”, en K. Middlebrook (ed.), *Electoral Observation and Democratic Transition in Latin America*, Center for US-Mexican Studies, University of California at San Diego, 1998b.
- Faxas, Laura. “El empresariado dominicano: ¿De clase dominante autoritaria a clase dirigente democrática?”, en *Estudios Sociales*, año 28, núm. 100, República Dominicana, Centro Bonó, abril-junio, 1995, pp. 63-102.
- Fernández, Enrique y Denise Paiewonsky (eds.). *Solidaridad y desarrollo: Impacto social de la alianza ONG, 1994-1997*, Editorial Búho, Santo Domingo, 1998.
- Fernández Reyna, Leonel y Jaime D. Fernández Mirabal (1996). *Armonizar: Políticas del gobierno hacia las ONG's* (Discursos pronunciados por el Presidente y Vicepresidente de la República el 18 de junio de 1996 en el encuentro con ONG dominicanas), Komunica, SA, Santo Domingo, 1996.
- Figueiras, Carmen L. “Feminismo en República Dominicana: Balances y perspectivas”, en *Género y Sociedad*, vol. 3, núm. 2, República Dominicana, septiembre-diciembre, 1995, pp. 41-89.
- Ianni, Vanna (1985). *Masas y revuelta*, Editora Universitaria-UASD, Santo Domingo, 1985.
- . *El territorio de las masas: Espacios y movimientos sociales en República Dominicana, abril 1984-abril 1986*, Editora Universitaria-UASD, Santo Domingo, 1987.
- León, Enrique de. “El movimiento estudiantil dominicano: Consideraciones críticas sobre su pasado, presente y futuro”, en UNICEF-INTEC, *Juventud: Situación y perspectivas en la República Dominicana*, Editora Amigo del Hogar, Santo Domingo, 1986.
- Lozano, Wilfredo. *La urbanización de la pobreza: Urbanización, trabajo y desigualdad social en Santo Domingo*, FLACSO, Santo Domingo, 1997.
- Moreno Ceballos, Nelson. “Historia del movimiento obrero

- y sindical dominicano”, en *Estudios Dominicanos*, año 1, núm. 3, República Dominicana, IED, enero-abril, 1985.
- Moya Pons, Frank (1992). *Empresarios en conflicto*, Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, Santo Domingo, 1992.
- Núñez Collado, Agripino. *La cultura del diálogo y la concertación en República Dominicana, 1985-1997*, PUCMM, Santo Domingo, 1997.
- O'Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986.
- Oviedo, José y Rosario Espinal. *Democracia y proyecto social-demócrata en República Dominicana*, Editora Taller, Santo Domingo, 1984.
- Paiewonsky, Denise. “Institucionalidad, organización de mujeres y consolidación estratégica”, en *Género y Sociedad*, vol. 2, núm. 2, septiembre-diciembre, 1994, República Dominicana, INTEC, pp. 67-81.
- Peña Valdez, Julio de. *Breve historia del movimiento sindical dominicano*, Ediciones Populares Dominicanas, Santo Domingo, 1998.
- Pérez, César. “Una transición democrática bloqueada por el Estado y los partidos”, en *Estudios Sociales*, año 27, núm.95, República Dominicana, Centro Bonó, enero-marzo, 1994.
- y Leopoldo Artilés (1992). *Movimientos sociales dominicanos: Identidad y dilemas*, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Santo Domingo, 1992.
- Rodríguez, Flavia. “Recession and adjustment in the Dominican Republic: 1983-1985”, en P. Brock M. Connolly and G. Vega (eds.), *Latin American Debt and Adjustment*, Praeger, New York, 1989, pp. 210-224
- Tejada, Darío (1989). “Los años 80 han sido de convulsiones sociales”, en *El Siglo*, junio 15.
- Vargas, Tahira. “Las organizaciones de base de Santo Domingo”, en *Estudios Sociales*, año 27, núm. 97, República Dominicana, julio-septiembre, 1994, pp. 91-112.

## Bibliografía

Bibliografía

———. *Las organizaciones de base en Santo Domingo*, Talleres Centro Editorial, Santo Domingo, 1996.

Vázquez, Sonia. "Participación política de las mujeres dominicanas: Una reflexión crítica", en *Género y Sociedad*, vol. 3, núm. 2, septiembre-diciembre, 1995, República Dominicana, INTEC, pp. 122-160.

———. "Liderazgo de las mujeres en las luchas populares urbanas", en *Estudios Sociales*, año 28, núm. 102, República Dominicana, INTEC, octubre-diciembre, 1995, pp. 7-19.

Villamán, Marcos y Héctor Cabrera. "Formas y alcances de la organización en la República Dominicana", en UNICEF-INTEC, *Juventud: Situación y perspectivas en la República Dominicana*, Editora Amigo del Hogar, Santo Domingo, 1986.